

29— Si en las paradas de transporte de pasajeros se construirán las correspondientes dársenas para el ascenso y descenso de los usuarios.

39— Si contemplan medidas de seguridad, en todo caso, cuáles son las mismas.

Lorenzo A. Pepe.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Ante la fundada inquietud de los directivos del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (SETIA) se ha reclamado ante las autoridades correspondientes sobre la imperiosa necesidad de construir un puente peatonal sobre la autopista Ricchieri en el kilómetro 21,500, en la localidad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

El sindicato en cuestión posee un centro recreativo para sus afiliados y sus familiares, con una concurrencia diaria de seiscientas personas, aumentando a novecientas los fines de semana. El inconveniente se genera cuando para el regreso hacia la Capital Federal, deben cruzar la autopista mencionada a fin de acceder a las paradas de las líneas de colectivos que allí se encuentran. Esta situación es de altísimo riesgo para las personas que en horas de intenso tráfico llegan a utilizar las banquetas para transitar, poniendo en riesgo su vida al enfrentarse con vehículos que circulan a alta velocidad, incluso superando los ciento veinte kilómetros por hora. Esa circunstancia afecta no sólo a las personas que concurren a dicho centro, entre las que se encuentran ancianos, niños y mujeres embarazadas, sino también al personal que trabaja en el lugar y vecinos de la zona.

La insistencia del gremio ha tenido como respuesta del Organo de Control de las Concesiones de Redes de Acceso a la Ciudad de Buenos Aires (OCRABA) que la obra de un puente peatonal no estaba contemplado, así como tampoco la pavimentación de las dársenas para el ascenso y descenso de pasajeros. A pesar de que por parte de la autoridad sindical se han presentado diversas propuestas alternativas, todas han tenido respuesta negativa.

Estamos ante una situación de riesgo sin solución a la vista, y ante esta actitud de absoluta irresponsabilidad por parte de la autoridad correspondiente, que pone en riesgo vidas humanas, queda claro quién será el responsable ante la Justicia y la gente de ocurrir hechos luctuosos. Solicito a los señores diputados acompañen este proyecto.

Lorenzo A. Pepe.

—A las comisiones de Transportes y de Obras Públicas

6358 D. 94
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Artículo 19— Incorpórase como segundo párrafo del artículo 119 del Código Penal, el siguiente texto:

A los fines de este artículo, acceso carnal es toda penetración anal o vaginal realizada median-

te el uso de cualquier parte del cuerpo del autor, o mediante el uso de cualquier objeto apto para producirla y la penetración peneana de la cavidad bucal.

Art. 29— Incorpórase como último párrafo del artículo 127 del Código Penal, el siguiente texto:

La pena será de tres a diez años cuando el abuso por su duración o circunstancias de su realización implique un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima.

Art. 39— Comuníquese al Poder Ejecutivo.

José I. Cafferata Nores.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Durante todo el curso de 1997 se discutió en la Comisión de Legislación Penal sobre la necesidad de revisar el Código Penal en relación a los delitos contra la honestidad, sobre la base de diversos proyectos presentados por varios señores legisladores.

En ese debate fijé mi posición acerca de que en la actualidad el concepto tradicional de honestidad debía ser enriquecido con nociones relativas a la dignidad, la integridad psicofísica y la libertad sexual de las personas. En esta línea de pensamiento, propuse formular un despacho de comisión, incorporando al artículo 119 del Código Penal un párrafo que estableciera qué debía entenderse por "acceso carnal". Lo mismo ocurrió con relación al artículo 127 relativo al abuso deshonesto en el que propuse una circunstancia agravante.

Al haber concluido el período ordinario de sesiones de 1997 sin que se haya podido concretar dicho dictamen, creo conveniente reflejar este trabajo en un proyecto de ley.

José I. Cafferata Nores.

—A la Comisión de Legislación Penal.

7

Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

I.— Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse la creación, en el ámbito del Mercosur, de un espacio de análisis y discusión sobre los siguientes puntos, a los fines de una eficaz prevención del delito en los Estados que lo integran.

a) Revisar algunas prácticas políticas (verbigracia el financiamiento de los partidos políticos) y muchos mecanismos de control de la actividad pública (verbigracia órganos revisores de cuentas públicas), en cuyos pliegues se favorece la ilicitud funcional y se protegen delitos de particulares que causan especiales perjuicios, en ámbitos administrativos, financieros y económicos;

b) Analizar el impacto sobre el fenómeno de las distorsiones de la economía, y la exclusión de los grupos sociales más débiles, la extrema pobreza, la desestructuración familiar, el analfabetismo o semianalfabetismo, la deserción escolar, el abuso de alcohol y drogas, la falta de capacitación y oportunidades laborales sobre todo para los jóvenes, la imposibilidad del acceso a la vivienda, el mal uso del tiempo libre, etcétera.

c) Procurar atender (y controlar) presiones o actitudes sociales (verbigracia estigmatización de personas afectadas por el poder penal) o prácticas estatales (verbigracia brutalidad policial) que por ser manifestaciones de la "violencia de arriba", suelen generar también comportamientos delictivos;

d) Reforzar la actividad de control del tráfico de dinero y bienes de procedencia dolosa.

II.— Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulsara, en el ámbito del Mercosur, acciones comunes para:

a) La sanción de normas penales y procesales penales uniformes, de aplicación en todos los países del Mercosur, con arreglo a los tratados internacionales a que han adherido y, aprovechando los proyectos ya elaborados con apoyo de la cooperación internacional;

b) El fortalecimiento de los organismos de persecución penal en cada país (modelo de Ministerio Fiscal) procurando que gocen de autonomía política y autarquía financiera, y cuenten con una estructura jerárquica y una organización desburocratizada, condenando sus actividades con las organizaciones de la sociedad civil.

III.— Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo celebre convenios con los demás países del Mercosur para establecer de qué modo:

1. Los agentes investigadores de un país puedan actuar en los otros, y en qué límites y bajo qué condiciones.

2. La información pueda obtenerse de los otros países sin el rigor formal del actual sistema de exhortos.

3. Ciertos actos con aptitud probatoria practicados en un país, tengan eficacia procesal en los demás y bajo qué formas y condiciones.

4. Puedan llevarse a cabo investigaciones conjuntas entre fiscales, policías o cualquier otro organismo de investigación criminal de cada país.

5. Puedan establecerse organismos conjuntos permanentes de investigación criminal para aquellos ilícitos de organización o efectos regionales.

6. Se encararán acciones de capacitación conjunta de equipos técnicos, y se procurará un aprovechamiento mutuo de recursos humanos y materiales.

7. Se facilitará extradición recíproca, librándola de cualquier traba formal que pudiere existir.

8. Se logrará en esta temática la participación de la sociedad civil a través de sus organizaciones relacionadas con la problemática de las víctimas del delito,

estableciendo formas de coordinación entre aquellas y los órganos oficiales de investigación criminal.

José I. Cafferata Nores.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

I.— Según las Naciones Unidas, en "casi toda América latina y el Caribe se percibe un debilitamiento del sentimiento de seguridad ciudadana. El temor tanto al delito como a sus consecuencias negativas en la seguridad y calidad de vida de la ciudadanía ha aumentado en los últimos años; así se manifiesta en debates públicos, medios de comunicación colectiva, pronunciamientos oficiales y encuestas públicas. Sin embargo a pesar del mal común, de país a país y de subregión a subregión, el problema varía no sólo en intensidad sino también en los tipos de delitos que se ven incrementados y en la forma como es percibido por la ciudadanía. Hay países donde la inversión, nacional y extranjera, está siendo afectada por el fenómeno, en otros se traduce en alarma social interna y en terceros, se producen ambos efectos. Asimismo en algunos países los delitos que se han visto incrementados son el secuestro, la violación de menores y el robo, en otros únicamente resurge el robo y el hurto y en terceros destaca la corrupción administrativa. Lo que parece común es la alarma social aunque siempre en diferente grado, pero responsabilizando al Estado por el problema. Las sociedades latinoamericanas concentran esta responsabilidad principalmente en el sector justicia, al que conceptúan como compuesto por el Poder Judicial, los ministerios de Justicia y del Interior, el Ministerio Público y las normas vigentes, atribuyéndole el haberse convertido en un aparato lento, lejano, parcial y caro". Esta situación puede también visualizarse en los países vinculados con el Mercosur.

II.— Se sugiere que una respuesta a esta problemática destacada por PNUD puede procurarse mediante la compatibilización normativa y coordinación institucional en materia de procuración y administración de la justicia penal, lo que se propone en este proyecto. Esto puede llevarse a cabo sobre la base de principios comunes a los países del Mercosur, que se expresan en el espíritu y a los textos de los tratados internacionales sobre derechos humanos con vigencia (diferenciada) en aquellos y en sus constituciones políticas, principios que hoy orientan diversos procesos de reformas en la administración de justicia de cada uno. Ello integrado con los aspectos de prevención del delito, y bajo la óptica de una política criminal conveniente.

III.— La política criminal puede visualizarse como un conjunto de decisiones de la autoridad pública sobre el delito, es decir, sobre su definición y consecuencias penales abstractas, y sobre su prevención, su persecución, su juzgamiento, y su castigo concretos, incluida la ejecución de la pena. Todas ellas deberían estar orientadas por los mismos principios y enderezadas al logro de